

GACETA OFICIAL

ORGANO DEL ESTADO

AÑO LII

PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ, SABADO 18 DE JUNIO DE 1955

Nº 12.693

—CONTENIDO—

COMISION LEGISLATIVA PERMANENTE

Decreto Nº 4 de 6 de Mayo de 1955, por el cual se aprueba un crédito extraordinario.
Decreto Nº 5 de 6 de Mayo de 1955, por el cual se aprueba un crédito suplemental.

ORGANO EJECUTIVO NACIONAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA *Departamento de Gobierno y Justicia*

Resolución Nº 143 de 20 de Septiembre de 1954, por la cual se confirma una resolución.
Resolución Nº 144 de 20 de Septiembre de 1954, por la cual no se avoca un conocimiento.

MINISTERIO DE EDUCACION

Decretos Nos. 1140, 1141 y 1142 de 29 de Diciembre de 1953, por los cuales se hacen unos nombramientos.
Resolución Nº 144 de 21 de Mayo de 1954, por la cual se amonesta a una maestra.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, COMERCIO E INDUSTRIAS *Departamento Administrativo*

Resuelto Nº 3890 de 17 de Diciembre de 1953, por el cual se reconoce sueldo en concepto de vacaciones.

MINISTERIO DE TRABAJO, PREVISION SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decretos Nos. 121 de 19, 122 y 123 de 20 de Marzo de 1954, por los cuales se hacen unos nombramientos.
Decreto Nº 124 de 24 de Marzo de 1954, por el cual se corrige unos decretos.
Resuelto Nº 1234 de 20 de Octubre de 1952, por el cual se llama a una segunda suplente para que ocupe un cargo.
Resuelto Nº 1235 de 21 de Octubre de 1952, por el cual se acepta una renuncia.

Decisiones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Avisos y Edictos.

Ministerio de Gobierno y Justicia

APRUEBASE CREDITO EXTRAORDINARIO

DECRETO NUMERO 4 (DE 6 DE MAYO DE 1955)

"por el cual se aprueba un Crédito Extraordinario por la suma de cuatro mil ciento ochenta y cinco balboas con ochenta y cuatro centésimos (B/. 4,185.84), a favor de la Asamblea Nacional".

La Comisión Legislativa Permanente,
en uso de sus atribuciones,

Vista la solicitud que hace el Consejo de Gabinete para destinar un crédito extraordinario por la suma de cuatro mil ciento ochenta y cinco balboas con ochenta y cuatro centésimos (B/. 4,185.84) para cubrir la diferencia de sueldo de cuarenta y ocho (48) Honorables Diputados, con motivo de la Audiencia celebrada en el juicio instaurado contra el Ing. José Ramón Guizado, y,

CONSIDERANDO:

Que se ha dado cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales que rigen la materia,

DECRETA:

Artículo único: Apruébase el Acuerdo del Consejo de Gabinete "por el cual se vota un Crédito Extraordinario por la suma de cuatro mil ciento ochenta y cinco balboas con ochenta y cuatro centésimos (B/. 4,185.84), a favor de la Asamblea Nacional" para cubrir la diferencia de sueldo de cuarenta y ocho (48) Honorables Diputados con motivo de la Audiencia celebrada en el juicio instaurado contra el Ing. José Ramón Guizado.

Dado en la ciudad de Panamá, a los seis días del mes de Mayo de mil novecientos cincuenta y cinco.

El Presidente,

HERACLIO BARLETTA.

El Vice-Presidente,

Hugo Torrijos.

Los Comisionados,

Carlos Uribe

José Arosemena G.

Carlos Arrocha B.

El Secretario General,

G. Sierra Gutiérrez.

APRUEBASE CREDITO SUPLEMENTAL

DECRETO NUMERO 5 (DE 6 DE MAYO DE 1955)

"por el cual se aprueba un Crédito Suplemental por la suma de doce mil novecientos setenta y ocho balboas con cincuenta y un centésimos (B/. 12,978.51), para reforzar los Artículos 10, 12 y 13 del Presupuesto de Gastos de la Asamblea Nacional, a fin de atender obligaciones contraídas por esta Corporación".

La Comisión Legislativa Permanente,
en uso de sus atribuciones,

Vista la solicitud que hace el Consejo de Gabinete para destinar un crédito suplemental por la suma de doce mil novecientos setenta y ocho balboas con cincuenta y un centésimos (B/. 12,978.51), para reforzar los Artículos 10, 12, y 13 del Presupuesto de Gastos de la Asamblea Nacional, y,

CONSIDERANDO:

Que se ha dado cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales pertinentes.

Artículo único: Apruébase el Acuerdo Municipal del Consejo de Gabinete "por el cual se destina un Crédito Suplemental por la suma de doce mil novecientos setenta y ocho balboas con cincuenta y un centésimos (B/. 12,978.51), para reforzar los Artículos 10, 12, y 13 del Presupuesto de Gastos de la Asamblea Nacional, a fin de atender obligaciones contraídas por esta Corporación" así:

El Artículo 10 se refuerza con una
partida de B/. 11,873.58

GACETA OFICIAL

ORGANO DEL ESTADO

ADMINISTRACION

Rafael Marengo, Encargado de la Dirección.—Tél. 2-2612

OFICINA:

Relleno de Barraza.—Tél. 2-3271

Apartado N° 3446

TALLERES:

Imprenta Nacional.—Relleno

de Barraza

AVISOS, EDICTOS Y OTRAS PUBLICACIONES

Administración General de Rentas Internas.—Avenida Norte N° 36

PARA SUSCRIPCIONES, VER AL ADMINISTRADOR

SUSCRIPCIONES

Mínima, 6 meses: En la República: B/. 6.00.—Exterior: B/. 8.00

Un año: En la República: B/. 10.00.—Exterior: B/. 12.00

TODO PAGO ADELANTADO

Número suelto: B/. 0.05.—Solicítense en la oficina de ventas de Impresos

Oficiales, Avenida Norte N° 5.

El Artículo 12 se refuerza con una
partida de 1,024.93

El Artículo 13 se refuerza con una
partida de 80.00

B/. 12,978.51

Dado en la ciudad de Panamá, a los seis días
del mes de Mayo de mil novecientos cincuenta y
cinco.

El Presidente,

HERACLIO BARLETTA.

El Vice-Presidente,

Hugo Torrijos.

Los Comisionados,

Carlos Uribe

José Arosemena G.

Carlos Arrocha B.

El Secretario General,

G. Sierra Gutiérrez.

ORGANO EJECUTIVO NACIONAL**Ministerio de Gobierno y Justicia****CONFIRMASE UNA RESOLUCION****RESOLUCION NUMERO 143**

República de Panamá.—Ministerio de Gobierno
y Justicia.—Departamento de Gobierno y Jus-
ticia.—Resolución número 143.—Panamá, 20
de Septiembre de 1954.

En virtud de recurso de apelación promovido
por el señor Constantino Ordoñez, contra la Re-
solución número 3, del 5 de Mayo del año en curso,
dictada por el Gobernador de la Provincia de
Bocas del Toro, por medio de la cual impuso multa
de veinticinco balboas (B/. 25.00), al recu-
rrente Ordoñez, y diez balboas (B/. 10.00) a Ju-
lio Navarro G., por la venta clandestina de una
pistola y uso ilegítimo de esa arma, respectiva-
mente, ha sido enviado a este Ministerio el ex-
pediente relativo a este asunto.

Consta en el Oficio N° 87, del 22 de Enero de
1954, dirigida al Gobernador de Bocas del Toro
por el Teniente Evaristo González, Jefe de la Oc-
tava Sección de la Guardia Nacional, que a Julio
Navarro se le decomisó, por no tener el permiso
correspondiente, una pistola marca "Star", cali-
bre .22, y conforme a las declaraciones de testigos

que constan en el expediente, Constantino Ordo-
ñez vendió esa arma a González, sin permiso de
autoridad competente.

La Resolución apelada es correcta y, por tanto,
El Presidente de la República,
en uso de sus facultades legales,

RESUELVE:

Confirmar la Resolución N° 3 del 5 de Mayo
de 1954, dictada por el Gobernador de la Provin-
cia de Bocas del Toro, por medio de la cual se
impuso a Julio Navarro G. y a Constantino Or-
doñez, multa de diez (10) y veinticinco (25)
balboas, respectivamente, por violación del De-
creto Ejecutivo N° 354, del 29 de Diciembre de
1948, sobre importación, venta y uso de armas
de fuego.

Comuníquese y publíquese.

JOSE A. REMON CANTERA.

El Ministro de Gobierno y Justicia,

C. ARROCHA GRAELL.

NO SE AVOCA UN CONOCIMIENTO**RESOLUCION NUMERO 144**

República de Panamá.—Organo Ejecutivo Nacio-
nal.—Ministerio de Gobierno y Justicia.—De-
partamento de Gobierno y Justicia.—Resolución
número 144. — Panamá, 20 de Septiembre de
1954.

El Alcalde Municipal de Panamá, dictó la Re-
solución N° 365-SJ, del 13 de Julio de este año,
por medio de la cual penó a varios sindicatos de
faltas, así:

"José Díaz (a) El Flaco, tres años de confina-
miento en la Isla de Coiba; Vernal Hacker McLin,
tres meses de arresto; Teresa Aguilar, seis me-
ses de arresto; Felipa Rodríguez (a) La Nata,
seis meses de arresto; Manuel Tovar, tres meses de
arresto; Ricaurte González Poveda, tres meses de
arresto por "matronería y alcahuetería" y a Etna
White de Martínez, tres años de confinamiento
en el lugar que designe el Organo Ejecutivo por
ejercicio de la prostitución clandestina".

Este fallo fué modificado por el mismo Alcalde
mediante la Resolución N° 373-SJ, del 22 de Julio
del año en curso, en el sentido de condenar a Fe-
lipa Rodríguez, a tres meses de arresto por al-
cahuetería y mantuvo la decisión en cuanto a los
demás sindicatos.

El Gobernador de la Provincia de Panamá co-
noció del negocio en segunda instancia y por me-
dio de la Resolución N° 57 de 6 de Agosto de
1954, confirmó el fallo recurrido.

Las penas impuestas a los recurrentes confor-
me a esa Resolución proceden en derecho, porque
existe en el proceso la prueba de su culpabilidad.
En consecuencia se estima innecesario la revisión
solicitada y por tanto,

El Presidente de la República,
en uso de sus facultades legales y con base en el
Artículo 1739 del Código Administrativo,

RESUELVE:

No avocar el conocimiento de este asunto.
Comuníquese y publíquese.

JOSE A. REMON CANTERA.

El Ministro de Gobierno y Justicia,
C. ARROCHA GRAELL.

Ministerio de Educación

NOMBRAMIENTOS

DECRETO NUMERO 1140
(DE 29 DE DICIEMBRE DE 1953)
por el cual se hacen unos nombramientos en el
Departamento Técnico del Ministerio
de Educación.

El Presidente de la República,
en uso de sus facultades legales,

DECRETA:

Artículo primero: Nómbrase a Ricardo M. Lasso, Jefe de Sección de 1ª categoría.

Artículo segundo: Nómbrase a Zoraida Brando, Jefe de Sección de 1ª categoría.

Parágrafo: Para los efectos fiscales este Decreto comenzará a regir a partir del 1º de Enero de 1954.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de Panamá, a los veintinueve días del mes de Diciembre de mil novecientos cincuenta y tres.

JOSE A. REMON CANTERA.

El Ministro de Educación,

VICTOR C. URRUTIA.

DECRETO NUMERO 1141
(DE 29 DE DICIEMBRE DE 1953)
por el cual se hacen unos nombramientos en la
Biblioteca Nacional.

El Presidente de la República,
en uso de sus facultades legales,

DECRETA:

Artículo 1º Nómbrase a Víctor M. Araúz, Oficial de 2ª Categoría.

Artículo 2º: Nómbrase a Juliana P. de Ulloa, Oficial de 3ª categoría.

Artículo 3º: Nómbrase a Julio Araúz, Oficial de 4ª categoría.

Artículo 4º: Nómbrase a Raquel Plata, Nery Q. de Vega, María Quintero, Mélida de Vergara, Petra María Fernández, Gregoria Pérez y Armando Berbey, Subalternos de 4ª categoría.

Artículo 5º: Nómbrase a Elisa de Goty, Emilia de Díaz, Esther Forero, Genoveva R. de Oliver, Carlota E. Almillátegui, Berta Falconett, Celmiria de Malek, Elena de Torrente, Elvia Jaén, Felicia P. de Bremmer y Lelia V. de Leignadier, Subalternas de 5ª categoría.

Parágrafo: Para los efectos fiscales este Decreto comenzará a regir a partir del 1º de Enero de 1954.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de Panamá, a los veintinueve días del mes de Diciembre de mil novecientos cincuenta y tres.

JOSE A. REMON CANTERA.

El Ministro de Educación,

VICTOR C. URRUTIA.

DECRETO NUMERO 1142
(DE 29 DE DICIEMBRE DE 1953)
por el cual se hacen nombramientos en la Sección
de Estadística, Personal y Archivos.

El Presidente de la República,
en uso de sus facultades legales,

DECRETA:

Artículo primero: Nómbrase a Manuel de J. Luzzardo Jefe de Sección de 1ª categoría.

Artículo segundo: Nómbrase a Leda Isabel Brid C. Oficial Mayor de 1ª categoría.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de Panamá, a los veintinueve días del mes de Diciembre de mil novecientos cincuenta y tres.

JOSE A. REMON CANTERA.

El Ministro de Educación,

VICTOR C. URRUTIA.

AMONESTASE A UNA MAESTRA

RESOLUCION NUMERO 144

República de Panamá.—Órgano Ejecutivo Nacional.—Ministerio de Educación.—Resolución número 144.—Panamá, 21 de Mayo de 1954.

El Presidente de la República,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

1º Que a este Despacho ha presentado el señor Enrique Cervera, portador de la cédula 28-7805, un escrito con fecha 23 de Noviembre de 1953, adjunto a las copias auténticas que expidió el Alcalde de San Miguel, Distrito de Balboa, Provincia de Panamá, sobre penas impuestas a la maestra Ana Jacinta de Valdés, miembro del personal docente de la Escuela de San Miguel, cabecera del Municipio de Balboa;

2º Que la pena de multa fué de B/. 12.00 por escándalo y violación de domicilio, según reza la información expedida por la Alcaldía Municipal, por actuación poco recomendable de la mencionada maestra contra la señora Lucila Brias;

3º Que la conducta desplegada por la señora de Valdés es contraria a la que debe observar una educadora;

4º Que para estas prácticas el Decreto de Sanciones señala penas por la comisión de estas faltas;

RESUELVE:

Artículo primero: Amonestar por escrito a la señora Ana Jacinta Barsallo de Valdés, maestra de la escuela de San Miguel, Distrito de Balboa, Provincia de Panamá, y llamarle la atención para que enmiende la conducta por ella observada.

Artículo segundo: Que la reincidencia en la comisión de faltas análogas a la presente, traerá como resultados su separación del Magisterio Nacional.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE A. REMON CANTERA.

El Ministro de Educación,

VICTOR C. URRUTIA.

Ministerio de Agricultura, Comercio e Industrias

RECONOCESE SUELDO EN CONCEPTO DE VACACIONES

RESUELTO NUMERO 3890

República de Panamá.—Ministerio de Agricultura, Comercio e Industrias.—Departamento Administrativo.—Resuelto número 3890.—Panamá, Diciembre 18 de 1953.

El Ministro de Obras Públicas,
encargado del Ministerio de Agricultura,
Comercio e Industrias,
en nombre y por autorización del Excelentísimo
señor Presidente de la República,

CONSIDERANDO:

Que la señorita Evelia María Dorado, Jefe de Sección de 5ª Categoría en Marcas de Fábrica en el Departamento de Comercio, solicita que se le reconozca y pague el sueldo correspondiente a dos (2) meses de vacaciones regulares a que tiene derecho por haber trabajado (del 1º de Febrero de 1952 al 31 de Enero de 1952 y del 1º de Enero de 1952 hasta el 30 de Noviembre de 1953).

Estas vacaciones serán efectivas a partir del 1º de Enero de 1954.

RESUELVE:

Reconocer a la expresada señorita Dorado, el sueldo correspondiente a las vacaciones que solicita, en los términos antes indicados y de conformidad con lo que establece el artículo 1º de la Ley 121 del 6 de Abril de 1943, reformatoria de la Ley 5ª de 1936, que a la vez reforma el artículo 796 del Código Administrativo.

Comuníquese y publíquese.

El Ministro de Obras Públicas, encargado del Ministerio de Agricultura, Comercio e Industrias,
INOCENCIO GALINDO V.

El Secretario de Comercio,
Miguel A. Corro.

Ministerio de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública

NOMBRAMIENTOS

DECRETO NUMERO 121 (DE 19 DE MARZO DE 1954)

por el cual se hacen unos nombramientos en el Hogar de María Auxiliadora de Chitré.

El Presidente de la República,
en uso de sus facultades legales,

DECRETA:

Artículo primero: Nómbrase a Clotilde Pérez, Cocinera de 5ª categoría en reemplazo de Graciela Vásquez, cuyo nombramiento se declara insubsistente.

Artículo segundo: Nómbrase a Aurora Rodríguez, Aseadora de 3ª categoría en reemplazo de

Aminta Bazán, cuyo nombramiento se declara insubsistente.

Artículo tercero: Nómbrase a Margarita Caballero, Oficial de 1ª categoría (lavandería) en reemplazo de Clotilde Pérez, quien pasa a ocupar otro cargo.

Artículo cuarto: Nómbrase a Gregoria Lombardo de Villarreal, Celadora de 2ª categoría, para llenar vacante.

Artículo quinto: Nómbrase a Adelaida Caballero, Oficial de 1ª categoría (lavandería), para llenar vacante.

Parágrafo: Para los efectos fiscales este Decreto tiene vigencia a partir del 1º de Marzo de 1954.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de Panamá, a los diecinueve días del mes de Marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro.

JOSE A. REMON CANTERA.

El Ministro de Hacienda y Tesoro, encargado del Ministerio de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública,

ALFREDO ALEMAN.

DECRETO NUMERO 122 (DE 20 DE MARZO DE 1954)

por el cual se hace un nombramiento en el Departamento de Salud Pública.

El Presidente de la República,
en uso de sus facultades legales,

DECRETA:

Artículo único: Nómbrase a Concepción Viejo, Estenógrafa de 3ª categoría, en reemplazo de Francia V. Iglesias, quien renunció el cargo.

Parágrafo: Este Decreto tiene vigencia a partir del 1º de Marzo de 1954.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de Panamá, a los veinte días del mes de Marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro.

JOSE A. REMON CANTERA.

El Ministro de Hacienda y Tesoro, encargado del Ministerio de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública,

ALFREDO ALEMAN.

DECRETO NUMERO 123 (DE 20 DE MARZO DE 1954)

por el cual se hace un nombramiento en el Hospital Nicolás A. Solano.

El Presidente de la República,
en uso de sus facultades legales,

DECRETA:

Artículo único: Nómbrase al señor Bertoldo Rodríguez, Aseador Subalterno de 2ª categoría, en el Hospital Nicolás A. Solano, en reemplazo de Enrique Williams Gómez, quien abandonó el cargo.

Parágrafo: Para los efectos fiscales este Decreto tiene vigencia a partir del 1º de Marzo de 1954.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de Panamá, a los veinte días del mes de Marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro.

JOSE A. REMON CANTERA.

El Ministro de Hacienda y Tesoro, encargado del Ministerio de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública,

ALFREDO ALEMAN.

CORRIGESE UNOS DECRETOS

DECRETO NUMERO 124
(DE 24 DE MARZO DE 1954)

por el cual se hacen unas correcciones en los Decretos 102 y 85 del 5 de Marzo y del 24 de Febrero respectivamente.

El Presidente de la República,
en uso de sus facultades legales,

DECRETA:

Artículo primero: El artículo 2º del Decreto 102 del 5 de Marzo de 1954, en lugar de Técnico de Laboratorio de 9ª categoría, debe decir Técnico de Laboratorio de 7ª categoría.

Artículo segundo: En el artículo 1º del Decreto 85 del 24 de Febrero, el nombramiento recaído en Rafael Castillo, debe entenderse a favor de Rafael Cantillo.

Artículo tercero: En el artículo 3º del Decreto 85, el nombramiento recaído en Esther María Quintero, debe entenderse a favor de María Esther Quintero.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de Panamá, a los veinticuatro días del mes de Marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro.

JOSE A. REMON CANTERA.

El Ministro de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública,

RICARDO M. ARIAS E.

LLAMASE A UNA SEGUNDA SUPLENTE PARA QUE OCUPE UN CARGO

RESUELTO NUMERO 1234

República de Panamá. — Ministerio de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública. — Resuelto número 1234. — Panamá, 20 de Octubre de 1952.

El Ministro de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública,

en nombre y por autorización del Excelentísimo Señor Presidente de la República,

CONSIDERANDO:

Que el Lic. Rubén Darío Córdoba, quien por Resuelto Nº 1210, fue llamado en su calidad de Primer Suplente para ocupar la plaza del Lic. Hermógenes De la Rosa, Magistrado Titular del Tribunal Superior de Trabajo, a quien se le concedió dos (2) meses de vacaciones, manifiesta en su oficio Nº 721 de 17 de los corrientes, que le es imposible atender el llamado que este Ministe-

rio le hiciera por nota Nº 468-S. A., por tal motivo, se

RESUELVE:

Llamar a la Lic. María Elena Lavergne, Segunda Suplente del Titular para que ocupe el cargo durante el período de las vacaciones concedidas al Lic. Hermógenes De la Rosa.

Comuníquese y publíquese.

El Ministro de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública,

RICARDO M. ARIAS E.

El Secretario,

Francisco Alvarado Jr.

ACEPTASE UNA RENUNCIA

RESUELTO NUMERO 1235

República de Panamá. — Ministerio de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública. — Resuelto número 1235. — Panamá, 21 de Octubre de 1952.

El Ministro de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública,

en nombre y por autorización del Excelentísimo Señor Presidente de la República,

CONSIDERANDO:

Que mediante comunicación fechada el 17 de Octubre del presente año, el Dr. Carlos Estrada, Médico Asistente del Centro de Salud Emiliano Ponce J., presenta renuncia del cargo,

RESUELVE:

Acéptase la renuncia de que se hace mérito, efectiva desde el 16 de Octubre de 1952 y se la da las gracias al Dr. Estrada por los servicios prestados a la Nación en el puesto que dimitió.

Comuníquese y publíquese.

El Ministro de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública,

RICARDO M. ARIAS E.

El Secretario,

Francisco Alvarado Jr.

DECISIONES DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DEMANDA Administrativa interpuesta por el Licenciado Carlos A. Cajal, en representación de José Mercedes Anaya, para que se revoque la sentencia de fecha 20 de Septiembre de 1951, dictada en el juicio "José Mercedes Anaya vs. Aminta Abood de Koroneos".

(Magistrado ponente: Augusto N. Arjona Q.)

Tribunal de lo Contencioso Administrativo.—Panamá, ocho de Noviembre de mil novecientos cincuenta y uno

El abogado Carlos A. Cajal ha interpuesto ante este Tribunal recurso administrativo en representación de José Mercedes Anaya para que reforme la sentencia del Tribunal Superior de Trabajo, dictada el 20 de Septiembre de 1951, en el juicio propuesto por José Mercedes Anaya contra Aminta Abood de Koroneos, con el objeto de que le pague la suma de B/. 2,932.28, en concepto de 30 días de sueldo por enfermedad, 30 días de pre-aviso, 20 días de vacaciones proporcionales, 35 días feriados y 4002 horas extras de trabajo.

La sentencia recurrida confirma la del Juzgado Seccional por la cual se condena a la parte demandada a pagar

al demandante la suma de B/. 299.92, equivalente a 30 días de enfermedad, 246 horas extras de trabajo y 26 días de fiesta nacional trabajados.

La sentencia del Tribunal Superior de Trabajo dice así:

"Tribunal Superior de Trabajo.—Panamá, veinte de Septiembre de mil novecientos cincuenta y uno.

Al momento de notificarse de la sentencia de primera instancia, el apoderado de José Mercedes Amaya interpuso recurso de apelación que, sustentado conforme consta a folios 37 y 38, ha dado lugar al pronunciamiento que por el presente medio se expide, en armonía con lo que disponen los Artículos 478 y 480 del Código de Trabajo.

Aminta A. de Koroneos, en su condición de representante del Comisariato Lupita, ha sido demandada por B/. 2.932.28 en concepto de 30 días de enfermedad, 30 días de preaviso, 20 días de vacaciones proporcionales, 35 días feriados, 216 días libres, y 4002 horas extras (fs. 7 y 8)".

La sentencia recurrida ha sido favorable a la demandada en lo que respecta al preaviso y las vacaciones proporcionales y desfavorable en cuanto al reclamo por 30 días de enfermedad y parte de las horas extras y los días de fiesta nacional mencionados en la demanda.

Sólo la parte demandante apeló del fallo de primera instancia y la parte demandada se ha allanado tácitamente al no hacer uso del recurso de apelación dentro del término que para ese efecto concede la Ley; y expresamente en su memorial de fojas 39, 40.

Como consecuencia de esto, el Tribunal pasa a examinar la parte de la sentencia que acusa el apelante.

Debe manifestarse, entonces, que el fallo recurrido es correcto en cuanto hace mérito de la excepción de prescripción, pues a folios 10 v. consta su alegación.

Por lo que concierne a las horas extras, días feriados y días de descanso el Tribunal hace presente que el debate judicial no puede salirse de los hechos expresados en el libelo correspondiente como fundamento objetivo de la demanda y que, en consecuencia, en el presente caso la labor probatoria debió concretarse a los tres hechos enunciados a folios 8, en los cuales no se hace mención de las prestaciones que constituyen el móvil del recurso sustentado a folios 37 y 38.

La razón de ser de esta posición parece obvia. El demandado comparece al juicio verbal preparado para refutar las afirmaciones contenidas en los hechos de la demanda y desde luego vulneraría el principio de lealtad procesal hacer el debate sobre hechos distintos.

En cuanto al preaviso, aparece en los autos el indicio desfavorable para el trabajador de haberse presentado a su trabajo, como se observa en el fallo de primera instancia, "cuando habían transcurrido nueve días de haber cesado la incapacidad", producida por la enfermedad de que dan cuenta los folios 6 y 25. Por esto y no por haberse traído al proceso elementos de prueba que respalden la aseveración relativa a la rebaja de sueldo que pretendió imponérsele al demandante, este despacho se encuentra sin base para reconocer que José M. Anaya fué despedido injustamente de su trabajo.

Por lo expuesto, este Tribunal de Trabajo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, confirma la sentencia dictada por el Juez de Trabajo de la Primera Sección en el reclamo entablado por José M. Anaya contra Aminta A. de Koroneos.

Sin costas por no encontrarse mérito para imponerlas. (Artículo 471 del Código de Trabajo).

El apoderado del actor expone en su recurso lo que él llama "motivos de ilegalidad". Como tales expresa tres "motivos" los cuales en parte, están concebidos en los siguientes términos.

"Primero: Esta sentencia fué apelada para ante el superior y éste confirmó dicho fallo por medio de la sentencia de veinte de Septiembre de 1951, en la cual ni siquiera advirtió dicho Tribunal que entre otras cosas el Juez a-quo se pronuncia en una forma un tanto descomulgada para no decirlo pero y además, ni siquiera advierte dichos Magistrados que la Excepción de Prescripción no ha sido sustentada ni se dice de que se desea que el Tribunal haga esa declaración. También dejó pasar la equivocación en cuanto a los Artículos citados pues se dice en la contestación que ésta no se ha hecho de acuerdo con el Ordinal 4º del Artículo 428 del Código de Trabajo, cuando este Artículo solo trata de los juicios verbales.

La prescripción que tanto han recalado los Tribuna-

les inferiores, se ha hecho descansar en los Artículos 422 y 423 del Código de Trabajo que nada dicen al respecto sino que hablan de que el presunto demandado puede solicitar que la contra-parte conteste positivamente. Solo he visto que hay un solo objeto, cual es de salvar a la señora Aminta Abood de Koroneos, puesto que mi contra-parte hizo todo lo que estuvo a su alcance por conseguir que absolvieran a su representada".

Respecto al hecho expuesto de que la excepción de prescripción no ha sido alegada debe el Tribunal manifestar que nada más alejado de la verdad. Dicha excepción fué alegada en tiempo oportuno al contestarse la demanda, en donde se dijo: "Aun cuando mi poderdante no le debe absolutamente ninguna prestación al demandante, alego la excepción de prescripción en lo que respecta a horas extras.". Ahora, si bien es cierto que como fundamento de tal excepción se señaló equivocadamente los Artículos 422 y 423 del Código de Trabajo, que no tratan sino de otra materia distinta, ello no es óbice para que se diga que no ha sido alegada. Tampoco se requiere para que esto ocurra que la parte diga que "desea que el Tribunal haga esa declaración", sino que la alegue como lo ha hecho la parte demandada.

"Segundo: El señor Juez Seccional de Trabajo ha invertido las cosas puesto que en lugar de dedicarse a defender al más fuerte, ha habido tener en cuenta que el Derecho de Trabajo es un derecho nuevo en el cual pone al Juez de parte de la parte más débil para arrancarle a la más fuerte parte de grandes ganancias ganadas a costa del sudor del proletariado. En este juicio el Juez a-quo solo se ocupa de defender a la demandada hasta de la excepción de prescripción apoyada en un derecho imaginario puesto que los Artículos citados ni la forma en que se ha expuesto son exactos. Con todo esto y no obstante haberse solicitado horas extras y pre-aviso y vacaciones y la contra-parte ni haber replicado, lo hace entonces el señor Juez a que no así, cuando se omitió por parte mía el estampar estos prestaciones del obrero omita una prestación y se haya alegado y nada diga la contra-parte, entonces el Juez a que debió condenar a la parte demandada a pagar dichas prestaciones.

Al fallar el Tribunal Superior de Trabajo en el sentido de confirmar la sentencia del inferior sin siquiera fijarse que se había equivocado el inferior en cuanto a la aplicación del derecho y la apreciación de la Excepción de prescripción para lo cual se debe tener presente lo que establece el Artículo 964 del Código Judicial esto es que se debe exponer claramente qué clase de prescripción se alega".

Insiste el apoderado de la parte recurrente, en que no obstante no haber alegado la parte demandada la excepción de prescripción, esta fué reconocida por el inferior. Pero que sin embargo, no pasó por alto la omisión en que incurrió al no consignar en los hechos algunas prestaciones reclamadas.

Respecto a lo primero considera el Tribunal que no es necesario repetir lo ya expuesto. Pero si agregar que no es indispensable señalar "la clase de prescripción que se alega", como se afirma puesto que al expresarse que "se alega la excepción de prescripción respecto a horas extras..." es de suponer que se refiere al pago de esas horas de trabajo.

En cuanto a que se pasó por alto la omisión de algunas prestaciones en los hechos de la demanda y que por ello no hubo consideraciones sobre ellas, debe este Tribunal hacer hincapié en que los hechos enmarcan la controversia en sus diferentes puntos y que siendo así, la parte necesaria está en la obligación de referirse a ellos bien negándolos o aceptándolos en lo que cierto o falso y que por tanto no es posible considerar cualquier prestación que se reclame fuera de ellas, ya que esto significaría colocar a la parte demandada en desventaja no permitiéndole la oportunidad de defenderse.

Debe tenerse presente que por razón de que el derecho de trabajo sea un derecho nuevo el Estado desempeña no sólo el papel de tutor de los obreros, como alega el recurrente, pues las funciones de éste están ampliamente establecidas en el Artículo 1º de nuestro Código Laboral. Su papel es el de regulador de "las relaciones entre el capital y el trabajo, colocándolas sobre una base de justicia social" sin perjudicar a ninguna de las dos partes". No significa que el Juzgador ha de "arrancarle" una suma de dinero a un patrono para entregársela al obrero, como parece entender el demandante.

Sobre el tercero "motivo de ilegalidad" se expresa el demandante así:

"Tercero: Al resolver el Tribunal Superior de Trabajo el recurso de apelación interpuesto por mí contra la sentencia del inferior de veinte y cinco de Julio de este año, no consideró siquiera que la excepción de prescripción de acuerdo con el Artículo 439 del Código de Trabajo y el Artículo 442 de la misma excerta que habla de hechos en esta incidencia dentro del juicio. Por esta razón las excepciones deben presentarse como incidentes esto es, con hechos y demás. Como dice nuestro Código de Trabajo en lo que se relaciona con la prescripción de los abligaciones dice el Código Civil en el Artículo 1698 "las acciones prescriben por el mero lapso de tiempo por medio del incidente. Esto último no se ha hecho en este juicio y por tanto lo resuelto en la demanda principal carece de valor".

Estó cierto que los Artículos 439 y 442 del Código de Trabajo hablan de "hechos que constituyen la excepción", pero ni esas disposiciones, ni ninguna otra contenida en esa excerta legal señalan que las excepciones se tramitan como incidentes "con hechos y demás". Si se trata de la excepción de prescripción de las horas extras de trabajo, por ejemplo, como en el presente caso, no se requiere un trámite aparte como incidente, porque conforme a lo dispuesto en los Artículos 622 y 623 del Código de Trabajo sólo se reconoce el pago de las horas extras servidas dentro de un año contado desde la presentación de la demanda hacia atrás, quedando prescritas todas las servidas con anterioridad, y todo eso es fácil determinar en el mismo expediente. Basta con que se alegue para que el juzgador proceda conforme el Artículo 491 del Código Judicial aplicable al caso.

En cuanto a las disposiciones violadas el demandante se expresa en la siguiente forma:

"Se ha violado el derecho que consagran las disposiciones del Artículo 209 del Código de Trabajo en relación con el 210 de la misma excerta. Para referirse específicamente al caso del señor José Mercedes Anaya, quien fué sometido a una operación de emergencia de peritonitis aguda debido a que el patrono no quería creer que dicho señor se encontraba enfermo. Este estado se fué agravando hasta que llegó el momento que Anaya cayó sin sentido y hubo de hospitalizarlo y operarlo de emergencia. Cuando salió del hospital se concedieron 30 días de incapacidad; pero esta incapacidad aumentó porque Anaya no pudo levantarse sino diez y nueve días después de haberse cumplido la incapacidad. Esto lo supo Koroneos y su apoderado. Por que no lo han alegado? Entonces por qué son los Tribunales de Trabajo quienes van a defender los intereses del patrono en este caso? En este caso se ha violado el Artículo 16 del Código de Trabajo, por lo que debe decirse algo al respecto. Puesto que no es cierto que el demandado no la demandada puesto que ningún momento aparece esta, ya que quien ha representado el negocio es un señor griego que no ha cumplido jamás con nuestro Código de Trabajo. Creo que si nada dice al respecto entonces no debiera considerarse siquiera el Artículo".

Ante la oscuridad de la anterior transcripción el Tribunal sólo puede manifestar que los artículos citados no guardan ninguna relación, ni siquiera remota, con el caso que se estudia. Los Artículos 209 y 210 del Código de Trabajo están destinados a definir lo que se entiende por enfermedad y riesgo profesional y los Artículos 16 y 19 del mismo Código señala los casos en que los contratos de trabajo deben constar por escrito y la presunción de certeza de los hechos alegados por el trabajador cuando no existe un contrato de trabajo escrito, cuya falta es imputable al patrono. Como se ve el presente caso no trata de ninguna de esos asuntos.

Agrega el demandante lo siguiente sobre las disposiciones violadas:

"Segundo: También se ha violado la 622 del Código de Trabajo, puesto que el señor Anaya estuvo en cama durante nueve días e diecinueve días, debió a la enfermedad en el trabajo y dicha ausencia no fué denunciada por el patrono sino que Anaya continuó trabajando pero eso sí, ganando sesenta balboas (B. 60.00) cuando a un paisano del señor Gerente de la casa que había entrado a trabajar en esos días, se le pagaba suma mayor sin conocer el trabajo. Entonces Anaya dijo que no podía trabajar por ese sueldo y acto seguido fue despedido por el Gerente. Entonces se violó el Artículo 81 del Código de Trabajo, también puesto que se despidió injustamente

al empleado más viejo de la casa cuando se encontraba en convalecencia".

Esta parte del recurso es una narración de hechos que han debido ser alegados y probados dentro del juicio laboral. Se afirma que el Artículo 81 ha sido violado al dictarse el fallo recurrido y no se ha expresado en qué concepto ha sido infringido, si por omisión en su aplicación, por interpretación errónea o por indebida aplicación.

Considera el Tribunal necesario expresar que las alegaciones del demandante carecen de fundamento y que la sentencia recurrida es inobjetable, por lo cual no es posible una reforma de la misma.

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, niega la reforma de la sentencia recurrida.

Notifíquese.

(Fdo.) AUGUSTO N. ARJONA Q.—(Fdo.) M. A. DIAZ E.—
fdo.) R. RIVERA S.—(fdo.) Gmo. Gálvez H., Secretario.

AVISOS Y EDICTOS

EDICTO NUMERO 27

El suscrito Gobernador de la Provincia de Panamá, al público,

HACE SABER:

Que el señor Isabel Lasso, ha solicitado a esta Administración Provincial de Tierras y Bosques, la adjudicación a título de compra de un globo de terreno nacional ubicado en el corregimiento de Santa Cruz, Distrito de Chame, de una extensión superficial de 2 Hts. 1.580 m2. (dos hectáreas mil quinientos ochenta metros cuadrados) y comprendido dentro de los siguientes linderos:

Norte: camino real a Santa Cruz;
Sur, propiedad de José María Pineda;
Este, propiedad de José Lasso;
Oeste, Río Lagarto.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 29 de 1925, se fija el presente edicto, en lugar visible de este Despacho y en la Alcaldía del Distrito de Chame, por un término de treinta días hábiles para que todo aquél que se considere lesionado en sus derechos los haga valer en tiempo oportuno.

Fijado hoy quince de marzo de mil novecientos cincuenta y cinco.

El Gobernador,

ALBERTO ALEMÁN.

El Oficial de Tierras,

Dalys Romero de Medina.

L. 7118

(Única publicación)

EDICTO EMPLAZATORIO

El que suscribe, Juez Primero del Circuito de Panamá, por este medio al público,

HACE SABER:

Que por escrito presentado personalmente el treinta y uno de mayo pasado, los señores Jaime Casanovas Padros, varón, mayor de edad, panameño, propietario, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número 28-31687 y Trinidad Escobet de Casanovas, mujer, mayor de edad, panameña, propietaria, con cédula de identidad personal número 28-19943, han solicitado título de propiedad sobre un edificio construido en un lote de terreno de propiedad de doña Mercedes Casanovas de Eleta y que constituye la finca número 8052, folio 164, Tomo 256 de la Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, Registro Público, finca que formaba parte de los terrenos denominados "El Cangrejo" y que se encuentra situada en los "Altos de la Cresta" de esta ciudad. El edificio en mención es de una sola planta, de pisos de granito y mosaico, de paredes de bloques, ladrillos y piedra labrada y techo de "Aluma-Life". Tiene un garage y un depósito anexos, hechos con los mismos materiales ya citados, que forman una sola unidad con la construcción principal. El edificio tiene una superficie de cuatrocientos veintinueve metros cuadrados con cincuenta y ocho decímetros cuadrados

(429.58 m².), y limita por todas sus partes con terrenos correspondientes a la finca 8052 sobre el cual se encuentra él levantado. Sus medidas lineales son las siguientes: De la esquina Suroeste del lote se miden diez (10) metros con rumbo N 49° 40' E y luego un metro con cincuenta decímetros (1.50 M.) con rumbo S 85° 20' E y se llega al punto A de la casa. De este punto se miden doce metros con diez centímetros (12.10 M.) con rumbo N 49° 40' E y se llega al punto B. De este punto se miden cuatro metros con diez decímetros (4.10 M.) con rumbo S 85° 20' E y se llega al punto C. De este punto se miden cinco metros con ochenta decímetros (5.80 M.) con rumbo N 49° 40' E y se llega al punto D. Del punto D. se miden cuatro metros con diez decímetros (4.10 M.) con rumbo N 85° 20' 0 y se llega al punto E. De este punto se miden diez metros con diez decímetros (10.10 M.) con rumbo N 49° 40' E y se llega al punto F. De este punto se miden diez metros con setenta decímetros (10.70 M.) con rumbo S 85° 20' E y se llega al punto G. Del punto G se miden tres metros con veinte decímetros (3.20 M.) con rumbo N 49° 40' E y se llega al punto H. De este punto se miden dos metros con un decímetro (2.01 M.) con rumbo S 81° 29' 40' E y se llega al punto I. De este punto se miden veinte metros (20 M.) con rumbo S 49° 40' 0 y se llega al punto J. De este punto se miden tres metros con ochenta decímetros (3.80 M.) con rumbo S 85° 20' E y se llega al punto K. De este punto se miden tres metros con sesenta decímetros (3.60 M.) con rumbo S 49° 40' 0 y se llega al punto L. De este punto se miden un metro con veinte decímetros (1.20 M.) con rumbo S 85° 20' E y se llega al punto M. De este punto se miden ocho metros con veinticinco decímetros (8.25 M.) con rumbo S 17° 16' 0 y se llega al punto N. De este punto se miden once metros con quince decímetros (11.15 M.) con rumbo N 85° 20' 0 y se llega al punto O. De este punto se miden sesenta decímetros (0.60 M.) con rumbo N 49° 40' E y se llega al punto P. De este punto se miden cuatro metros con setenta y cinco decímetros (4.75 M.) con rumbo N 85° 20' 0 y se llega al punto A que sirvió de partida.

Por tanto, se fija el presente edicto en lugar público de este despacho, hoy seis de junio de mil novecientos cincuenta y cinco, por un término de treinta días a fin de que los que pudiere tener derechos sobre dicho inmueble los hagan valer.

El Juez,

OCTAVIO VILLALAZ.

El Secretario,

Raúl Gmo. López G.

L. 7132

(Única publicación)

EDICTO NUMERO 12

El suscrito Gobernador de Herrera, Admor. Provincial de Tierras y Bosques, para los efectos de Ley, al público,

HACE SABER:

Que el señor Liborio García Araúz, Abogado en ejercicio de esta localidad y cedula N° 47-45781; en memoria de fecha 19 de Noviembre de 1954, dirigido a esta Gobernación de Herrera, Admor. Provincial de Tierras y Bosques, solicita para su mandante señor Lisandro Pérez, varón, mayor de edad, casado, agricultor, panameño, cedula N° 28-1779 se le expida título de propiedad en compra sobre el globo de terreno denominado "Sin Nombre" ubicado en El Caracucho, corregimiento de La Pitaloza, Distrito de Los Pozos de una capacidad superficial de cincuenta y siete hectáreas con ocho mil quinientos cincuenta metros cuadrados (57 Hts. 8,550 MC.) dentro de los siguientes linderos: Norte, terrenos de Venero Ojo, camino Real de El Caracucho a La Pitaloza; Sur, Quebrada de Piedra y terreno de Gregorio Ojo; Este, terreno de Lisandro Pérez (Peticionario), cafetal de Lorenzo Barria y terreno de Venero Ojo; Oeste, terreno de Gregorio Ojo.

Y, para que sirva de formal notificación al público, para todo el que se considere perjudicado con esta solicitud, haga valer sus derechos en tiempo oportuno se fija el presente Edicto en lugar visible de este Despacho, por el término de Ley, se envía copia a la Alcaldía del Distrito de Los Pozos para los mismos fines y otra

se le entrega al interesado para su publicación por tres veces consecutivas en el periódico de la localidad (Ecc. Herrero) y una sola vez en la Gaceta Oficial.

Chitré, 10 de Febrero de 1955.

El Gobernador Admor. Prov. de Tierras y Bosques de Herrera,

MOISES GALVEZ.

El Oficial de Tierras y Bosques,

R. Ochoa Villarreal.

L. 7113

(Única publicación)

EDICTO NUMERO 118

El Secretario del Juzgado Primero del Circuito de Chiriquí, a la señora Cristina Tello de Rivera, mujer, casada, panameña, de oficios domésticos, cuyo domicilio actual se desconoce

NOTIFICA:

Que en el juicio de divorcio que le adelanta Marco Rivera, se ha dictado una sentencia que dice literalmente así:

"Juzgado Primero del Circuito de Chiriquí.—Sentencia N° 233.—David, treinta y uno de agosto de mil novecientos cincuenta y cuatro.

Vistos: Marcos Rivera promovió esta acción de divorcio para que el tribunal declare en sentencia definitiva disuelto el vínculo matrimonial que lo une a Cristina Tello.

Se aducen, como causas justificativas de la acción, el adulterio de la mujer, la separación de hecho por más de cuatro años y el abandono absoluto por parte de la demandada de sus deberes conyugales, hechos éstos que dan vida a las causales 1ª, 7ª y 9ª del artículo 114 del Código Civil.

La cónyuge demandada no contestó el traslado de la demanda por cuya circunstancia se le acusó la rebeldía y el tribunal la decretó por proveído visible a folios 7.

Durante el término de pruebas se recibieron los testimonios de Faustino Espinosa, Lorenzo González, Santana Santamaría, Ovidio González Espinosa, Sotero Centeno y Mercedes Centeno, con los que ha logrado probar el actor, sin lugar a dudas, las causales que fundamentan la demanda, puesto que la mayoría de esos testigos saben que los esposos Marcos Rivera y Cristina Tello están separados desde hace más de cuatro años; que poco tiempo después de la separación, la esposa ha hecho vida marital con distintos hombres y que en la actualidad vive en Puerto Armuelles con Ovidio González Espinosa, bajo un mismo techo, como si fueran casados.

Ante esta situación no queda otra solución razonable que no sea la disolución de ese vínculo que ya no tiene ninguna justificación, y así lo estima también el señor Fiscal Primero del Circuito cuando opina en su Vista N° 219 que procede, que la demanda debe ser resuelta en forma favorable a las pretensiones del actor.

Por lo expuesto, el Juez Primero del Circuito de Chiriquí, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA DISUELTO el vínculo matrimonial que une a Marcos Rivera y Cristina Tello, que consta inscrito en el tomo siete de matrimonios de la Provincia de Chiriquí, al folio veinte, partida cuarenta del Registro Civil.

Los divorciados podrán contraer nuevo matrimonio una vez que se inscriba este fallo en el Registro Civil, previa su ejecutoria, y para tales efectos se dispone enviar copia del mismo a ese departamento.

Cópiase y notifíquese.—(fdo.) A. Candanedo, Juez 1º del Circuito.—Gmo. Morrison, Secretario.

Este edicto permanecerá fijado en esta Secretaría por el término de treinta (30) días, contado desde hoy, y la notificación de la sentencia transcrita se considerará válidamente hecha a la demandada a partir de desfijación.

David, treintuno (31) de mayo de mil novecientos cincuenticinco (1955).

El Secretario,

Gmo. Morrison.

L. 21,099

(Única publicación)